
LA ALTERNATIVA SOCIALISTA

Javier Solana



El Partido Socialista, en las próximas elecciones generales, puede convertirse en la primera fuerza política de nuestro país.

Esta afirmación, que parece incontrovertible, genera entre los ciudadanos sentimientos diversos. En la gran mayoría renace la esperanza de que se configure un gobierno con objetivos, comportamientos y talentos distintos de los clásicos de derecha, y que redunden en su beneficio. En otros, la inclinación es más hacia el temor, por razones obviamente contrarias a las que en los primeros producen satisfacción. Para algunos el momento se con-

vierte en ocasión impar que marcará, de manera imborrable, sus vidas. En cualquier caso el acontecimiento se presenta para todos como histórico, *aunque sólo sea por los largos años de espera o de temor a su llegada*. La muerte de Franco, la conquista de la democracia, el esplendor de la libertad, hechos todos, sin duda, importantísimos, empedraron el camino para la inflexión que debe suponer un gobierno socialista que consolide entre los

españoles una convivencia larga y sólida en Paz, Libertad y Justicia.

La Historia de España no ha sido pródiga en períodos en los que la convivencia y el avance hacia la Justicia fueran duraderos. Desde comienzos del siglo XIX, la España contemporánea no ha cesado en buscar un marco de convivencia libre y pacífica entre todos los ciudadanos y los pueblos que la componen. Se puede afirmar, sin pecar de voluntarismo, que nunca en siglo y medio de historia se ha encontrado España en condiciones más favorables para la estabilización definitiva de la democracia y para la adquisición plena de los derechos de ciudadanía. La sociedad española actual está superando los desgarramientos sociales que la caracterizaron en el pasado así como la inestabilidad política y el atraso económico en que se iniciaron experiencias democráticas y progresistas anteriores. Nuestra sociedad muestra una homogeneidad mayor y una disposición superior a la convivencia pacífica.

La economía española, a pesar de la crisis por la que atraviesa, las contradicciones que la caracterizan y su desfase tecnológico, es ya una economía industrial con posibilidades de crecimiento y con una renta por habitante que nos sitúa en el contexto de las sociedades desarrolladas de la tierra.

El marco internacional, por inquietantes que aparezcan algunos de los últimos signos, no deja de ser muy diferente del de los años treinta, cuando iniciamos la última andadura hacia el progreso en nuestro país.

Por todo ello, tanto por las condiciones sociales e ideológicas como por las económicas, España puede y debe marchar firmemente hacia la Libertad, constituyéndose como Nación democrática y progresista estable.

El papel fundamental de un gobierno socialista hoy es hacer posible esa marcha hacia la Libertad y hacia la plena ciudadanía de los españoles en el ámbito de lo político, de lo económico y de lo social, evitando que esta experiencia se frustre, como antaño, por errores propios y por la mezquindad y los egoísmos ajenos.

A pesar de que objetivamente las posibilidades para llevar a cabo la tarea son muchas, no dejan de aparecer negros nubarrones en el horizonte que pueden dificultarla, ligados unos a los problemas seculares de España, otros más relacionados con la forma en que la transición política hacia la democracia se ha desarrollado, algunos, en fin, conectados con problemas que aunque surgidos más allá de nuestras fronteras —la crisis económica, por ejemplo— encuentran aquí lugar propicio para agravarse.

El procedimiento singular y atípico con que se han sorteado las innumerables dificultades asociadas con la liquidación de la dictadura —síntesis entre ruptura y reforma— conllevaba ventajas a la vez que inconvenientes y riesgos. En su haber ha contado con algo importante: Los cambios que han tenido lugar, tanto en el campo político como en el sindical, se realizaron sin traumatismos graves. Pero se ha encontrado sometido a un riesgo que se hizo más patente con el tiempo: La permanencia de reductos franquistas anclados en los ámbitos del Estado y en el poder económico cuya amenaza ha pendido como espada de Damocles a lo largo del trayecto. Son muchos los ejemplos que se pueden aportar. Como muestra basta recordar los acontecimientos del 23 de febrero de 1981. Como envés de lo anterior y alimentándose mutuamente se encuentra el problema del terrorismo y la violencia que, aún no siendo únicamente español, en nuestra tierra adquiere unas características muy específicas que dificultan, de manera extraordinaria, su solución. Pero es preciso recordar aquí que la vio-

**La sociedad española actual
está superando
los desgarramientos sociales
que la caracterizaron
en el pasado.**

lencia terrorista no nace con la Democracia, sino contra el Franquismo.

La tentación involucionista violenta y el terrorismo constituyen las amenazas más graves, pues su meta es arrancar de cuajo la Democracia. Pero existen otras dificultades que, sin tener la gravedad de las anteriores, son un elemento de inestabilidad que en ocasiones puede tomarse, en convivencia con los segmentos involucionistas, en auténtico motivo de alarma para la causa de la Libertad. Me estoy refiriendo a *la debilidad política de la derecha democrática*, que incide en que España, hoy, no sea todavía una nación plenamente moderna. Las causas las resumiremos en breves brochazos.

Nuestro proceso de industrialización fue protagonizado fundamentalmente por el Estado y por una burguesía financiera, sin que la burguesía industrial tuviera, como clase, la importancia que ha tenido en otros países. Esta debilidad económica de la derecha y de los grupos que estaban socialmente detrás de esta opción, se convertía en fragilidad política de la derecha democrática, encontrándose tradicionalmente en posición subordinada respecto a los sectores antidemocráticos o más reacios a la aceptación de la soberanía popular.

Por ello, la derecha española no ha asumido su papel histórico de asentar un Estado moderno, a diferencia de lo ocurrido en los países del mundo occidental. Tradicionalmente, no ha caminado al unísono con sus homólogos de la Europa democrática, y ha eludido permanentemente su responsabilidad de obrar un cambio político, social y económico paralelo al de nuestras sociedades vecinas.

La fragilidad de la burguesía más abierta significó que durante la transición tuviera que recurrir a vertebrarse en torno al Estado y aliarse con sectores procedentes

La debilidad política de la derecha democrática es un elemento de inestabilidad.

del régimen anterior, impidiendo que se dieran los pasos necesarios en la vía de la modernidad como, por ejemplo, la reforma democrática de los aparatos del Estado. Su nucleación alrededor de UCD, para comparecer a las elecciones del 77 y del 79, no pasó de ser un entente coyuntural y de convivencia como los acontecimientos recientes han puesto palpablemente de manifiesto. Poco se puede entender de los avatares de los últimos años sin tener presentes las luchas internas en el seno de la representación política de la derecha, que a la postre no era, sino, manifestación de la batalla entre los sectores más juiciosos e iluminados, y los ligados a la derecha tradicional española, que hasta ahora se ha caracterizado por una relación condicional y hasta problemática con la democracia. Si durante los primeros años de la transición la audacia de algunos de sus dirigentes parecía hacer inclinar la balanza hacia la fracción más moderada y a tono con los tiempos, no dejó de ser un espejismo que se hacía más evidente con el pasar del tiempo. Los componentes más reaccionarios, con nocturnidad y alevosía en ocasiones, a la luz del día en otros momentos, han ido minando el terreno a los sectores más abiertos quienes, presos de sus propios errores de cálculo, personalismos y egoísmos irresponsables, no han podido impedir el embarrancamiento de la nave en las playas de la reacción. Así, hoy vemos como el instrumento político por ellos inventado para cruzar desde la orilla de la dictadura a la de la democracia, después de un largo proceso de tensiones internas, secesiones y abandonos se disuelve ante los ojos atónitos de la ciudadanía. Y todo ello ocurre dando la espalda a los verdaderos y muy graves problemas que atosigan a la mayoría de los ciudadanos. La consecuencia de una situación tan insólita son obvias: Paralización

de la acción de gobierno, irritación y distanciamiento de una parte del electorado, podredumbre de los problemas y el fantasma del «vacío de poder» rondando en

las mentes de aquellos con vocación de salvadores patrios.

**La derecha se debate
ante dos alternativas
que recuerdan**

**la situación anterior a las primeras
elecciones.**

cualquier intento de adaptación al tiempo histórico, han ejercido el dominio social al margen y contra las aspiraciones de la mayoría.

Hoy volvemos a encontrarnos con una derecha que se debate ante dos alternati-

vas que, con matices, recuerdan la situación anterior a las elecciones del 77. De una parte un intento casi desesperado para nuclear una derecha moderna, homologable a Europa, respetuosa con la Constitución y dispuesta a aceptar un triunfo electoral de los socialistas. De otra la vertebración alrededor del tardo-franquismo, la vuelta al pacto de nuevos «magníficos» maquillados juvenilmente, apoyados en la Iglesia tradicional, en sectores del capitalismo más reaccionario y en algunos grupos dentro de los aparatos del Estado. Sin disimularlo demasiado, proclives a no aceptar la alternancia en el poder.

La situación desde el campo de la derecha no es, pues, reconfortante. Recupera el liderazgo político la derecha más tradicional carente de proyecto que supere la defensa más alicorta de sus intereses. La misma que malogró otras importantes oportunidades históricas en 1812, 1869 ó 1931. Una derecha sin sentido nacional más allá del patriotismo ramplón de los que afirman amar a España en abstracto para destrozarla con su quehacer diario.

Una Nación sólo existe cuando hay un grupo dirigente capaz de interpretar y agrupar el interés general, consiguiendo el consenso en torno a cuestiones básicas que la definen: valores sociales, valores culturales, posición en el mundo, etc. En España, la derecha no ha sido capaz de generar esa *clase dirigente* y se ha limitado a ejercer de *clase dominante*, sin preocuparle incluso los elementos de legitimación que sus homólogos europeos pusieron en práctica. Imbuída de fatalismo y pesimismo con respecto a la solución de los grandes problemas nacionales, falta de confianza en las mujeres y hombres que componen España, destructora de

Relacionado con los temas tratados anteriormente de nuestra historia, y como elemento condicionante de la situación presente, es imprescindible referirse a la tradicional *invertebración de la sociedad española* y a la otra cara de la moneda, el *corporativismo* desafortunado que la impregna. La sociedad española ha sido, y es, una sociedad poco asociativa, en la que los factores de solidaridad entre los ciudadanos y el trabajo conjunto para resolver problemas comunes son poco intensos. Es una sociedad (ciertamente invertebrada) poco estructurada políticamente, por razones que se remontan en el tiempo, pero que se agravan durante el franquismo. La ideología de la dictadura intentaba extender entre los ciudadanos el miedo, el cinismo, la apatía y la desconfianza respecto a la política o cualquier otro empeño comunitario y solidario.

La llegada de la democracia pone de manifiesto la gravedad de la enfermedad corporativa ligada a la desintegración social y el poco arraigo de las instituciones que configuran el Estado moderno. El proceso de formación de la nación se caracteriza por la integración, en un todo común, de partes diversas y dispersas. El fenómeno corporativo es el contrario: la falta de conciencia de pertenecer a un proyecto de «todos» y la falta de solidaridad con las restantes partes del cuerpo común. Tanto la desarticulación social como el corporativismo, graves cánceres de nuestra sociedad, son legados de un modo de hacer de la derecha española tradicional que el franquismo alimenta y ampara. La democracia, para sobrevivir, tiene que sanar urgentemente estas enfermedades del cuerpo social. El comportamiento de la derecha durante la transición política no ha colaborado a procurar su cura. Hoy asistimos al espectáculo de ver a corpora-

ciones atribuyéndose el monopolio de la defensa del interés nacional que casualmente definen como aquél que coincide con sus más estrechos intereses. Así, la corporación médica se siente llamada a definir el modelo sanitario más beneficioso para toda la sociedad, y para que no quepa duda del sentido del modelo recompensa como presidente de la corporación a quien acaba de ser sancionado por la Administración por anteponer de manera grave su interés particular sobre el general con grandes irregularidades. O determinados grupos de la corporación militar que se atribuyen el monopolio de los intereses generales más allá de la voluntad popular expresada en las urnas. O el sentido patrimonial con que actúan algunos altos cuerpos de la Administración. Como ejemplo más reciente y llamativo del poder de algunos cuerpos basta con recordar la muerte de cientos de ciudadanos por intoxicación con aceite adulterado, y ni un solo funcionario público ha sido sancionado o expedientado.

A las consideraciones hasta ahora expuestas, conectadas con el enraizamiento de España como nación moderna y la democratización real de la Sociedad y del Estado, hay que añadir el reto de mayor envergadura que se inicia con la Constitución de 1978: la solución del viejo problema de la unidad de España con la construcción del Estado de las Autonomías. Los dos vectores de democratización—institucional y territorial— aparecen hoy como convergentes siendo imposible la solución de los problemas asociados con uno sin resolver los del otro.

La llegada de los socialistas al poder se realiza cuando España se encuentra atravesada por una crisis económica de enorme profundidad, repitiéndose el triste sino de tenerla como negra compañera al iniciarse un nuevo intento transformador. La crisis, bien sabido es, se origina más allá de nuestras fronteras y alcanza a to-

Hoy vemos a corporaciones atribuyéndose el monopolio de la defensa del interés nacional, que casualmente definen como aquél que coincide con sus estrechos intereses.

dos los países industrializados, pero adquiere aquí tintes más sombríos. Nuestro sistema productivo, construido en años de dictadura, adolece de enormes fragilidades estructurales que se ponen de manifiesto de manera dolorosa a la llegada de la crisis. Un aparato productivo excesivamente dependiente de la energía con un contenido tecnológico propio y muy escaso por no decir nulo, y la presencia activa de la clase obrera organizada en sindicatos, hace que España se sitúe en la incierta posición de un país con costes salariales superiores a los de países que se esfuerzan por incorporarse al mundo industrial, sin alcanzar, por otra parte, los niveles tecnológicos suficientes para competir con los países en punta. Consecuencia explícita de esta situación: más de dos millones de parados.

La escasa presencia de una burguesía emprendedora con capacidad de innovación y de adaptación a las nuevas circunstancias dificulta la resolución del problema, a pesar de los esfuerzos responsables de las organizaciones sindicales. Ejemplo paradigmático es la CEOE que más que una patronal en sentido estricto se configura como grupos de presión económico-político, y en cuya cúspide abundan más los altos funcionarios excedentes que los auténticos empresarios que legitimen su función asumiendo riesgos. Su tendencia a protegerse de los malos vientos bajo el cobijo del Presupuesto del Estado niega, en la práctica, las resonantes declaraciones sobre las virtudes de la economía de mercado. Todo ello obliga a contemplar la crisis económica como el primer problema a resolver de entre el complejo entramado de dificultades de la situación española presente.

En las breves consideraciones anteriores hemos tratado de poner de manifiesto las carencias más importantes de nuestra sociedad en esta hora, y consecuentemente las tareas de mayor calado que requie-

ren solución por parte de un gobierno socialista. Resumámoslas.

De un lado, la modernización y democratización real de la Sociedad y del Estado, resolviendo los problemas seculares de España acentuados durante la dictadura. De otro, encontrar una salida a la crisis económica introduciendo elementos de transformación económica y social profundos.

La tarea es, sin duda, ingente pues, a la propia de un partido socialista, cuando asuma el poder, se suma aquella otra que la desidia histórica de la clase dominante dejó sin resolver. Pero tiene, a su vez, un enorme atractivo para quienes deseen modificar seriamente la estructura de dominación y desigualdad, pues no en vano va

a ser la izquierda quien dirija el proceso de configuración de España como nación moderna, y en ese camino podrá sembrar, sin duda, en las entrañas de la sociedad española, simientes de Justicia, de Igualdad, de Libertad, de Socialismo.

Parece claro que al PSOE le ha correspondido la tarea histórica de constituirse en elemento vertebrador de fuerzas sociales que protagonice la transformación de nuestro país hacia una sociedad libre, tolerante, estable, avanzada, que enlace con los mejores momentos de la historia de España. Concurren en el PSOE un número de circunstancias que favorecen esta tarea. El Partido Socialista se ha convertido en la única fuerza política con implantación en toda España, lo que le configura como vehículo real de identidad nacional, situándole, por tanto, en condiciones muy favorables para completar, desde una perspectiva solidaria, la construcción del Estado de las Autonomías. Por otra parte, la profunda crisis que atraviesan las demás formaciones políticas de la izquierda, particularmente el PCE, hace que sobre el PSOE converjan las miradas de todos aquellos que claman por un cambio

en profundidad en nuestro país. Finalmente, la incapacidad de la derecha que capitaneó la transición política para enfrentarse seriamente con los problemas de fondo de nuestra sociedad, ha conducido a que los sectores más preclaros de la burguesía encuentren en los socialistas la única esperanza para incorporar a España a la modernidad. Hoy es posible, pues, articular *una mayoría para el cambio* en nuestro país, sobre el eje del programa socialista. Una mayoría en la que se vean reflejados todos aquellos que deseen la reforma democrática de la sociedad y del Estado, en una perspectiva de consolidación y profundización de la democracia y las libertades, y la transformación económica y social en profundidad en el afán de superar una sociedad injusta. La tarea que nos proponemos requiere, además de

una profunda voluntad transformadora, una perspectiva temporal adecuada.

La dimensión histórica del cambio que nuestro país necesita,

no puede realizarse en breve tiempo. Tendrá que ser bordada con más hilos de audacia y tenacidad que de flaqueza y miedo. La oferta socialista, por tanto, debe discurrir en todas sus manifestaciones por un doble plano, cubriendo dos objetivos:

— Por un lado, un *objetivo de clase*, que debe atravesar toda la acción política. Se trata de acabar con la estructura de la desigualdad y de la dominación, actuando sobre los sectores más marginados de la sociedad; avanzando, en fin, hacia un mayor control social de la economía de manera que los costes asociados a la salida de la crisis no recaigan sobre las espaldas de los más débiles.

— Por otro lado, un *objetivo nacional* que permita romper las ligaduras que atan a España a la premodernidad y que también debe estar presente en toda la acción de gobierno: la economía, la cultura, el sistema educativo, la investigación y la ciencia, las relaciones entre lo público y lo

privado, la corrupción, la fragmentación social, la posición de España en el mundo.

Estos dos objetivos en ningún caso de-

ben ser contradictorios. Un gobierno socialista debe hacerlos compatibles si en su acción no pierde la perspectiva histórica de lo que significa avanzar hacia el socialismo.

Todo tiempo de crisis lo es de transformaciones en la totalidad de los ámbitos de la vida social: la economía, la cultura, las costumbres. Se trata de dirigir en favor de la mayoría los cambios que, inexorablemente, se van a producir, de manera que al término de la crisis las clases dominadas hayan mejorado sus posiciones relativas y España, como un todo, no se configure en un país cada vez más pobre y dependiente.

El desarrollo progresista de la Constitución de 1978 debe convertirse en la meta de los socialistas para el cuatrienio, lo que comporta la profundización de la democracia y la lucha por la *consecución de la plena ciudadanía política, social y económica* para todos los españoles.

La conquista de *la ciudadanía plena en materia política* significa estabilizar la Democracia afrontando con energía el acoso de la subvención de la extrema derecha y de los grupos involucionistas allí donde se encuentren, y paralelamente llevar a cabo una política antiterrorista eficaz. Significa también el que todos los poderes se encuentren realmente sometidos al poder civil atajando de raíz cualquier veleidad que intente salirse de esta norma.

Implica, por otra parte, que el Estado quede «nacionalizado» al servicio de toda la sociedad y no de minorías privilegiadas. Para ello un objetivo ineludible es la *Reforma de la Administración*. No es posible pensar en ningún tipo de acción de Gobierno eficaz ni desarrollar un progra-

**La ciudadanía social
debe de articularse a través
de la multiplicación
del esfuerzo educativo
y cultural.**

ma de cambio social que no exija una reforma en profundidad del aparato del Estado. Pero hay que tener en cuenta que ningún programa de estas características,

en las condiciones de una sociedad española actual, será eficaz si no es fruto de un acuerdo amplio entre las fuerzas sociales y políticas y si no cuenta con un fuerte respaldo popular. La Administración no se reformará por sí sola. Sin el estímulo y el apoyo de un movimiento de interés social por la Administración y sin llevar a los ciudadanos la conciencia de que son ellos los verdaderos titulares de un aparato que pagan y deben poner a su servicio, se embarrancará cualquier intento reformador serio. El ejercicio de la ciudadanía activa no puede limitarse al nivel político electoral tradicional. Interesar a los ciudadanos en la reforma de la Administración, en la manera de cómo atiende sus intereses es equivalente a interesarles por la democracia desde la lógica de la igualdad. El principio de eficacia no tiene para nosotros nada del nominalismo al que lo está reduciendo la negligencia de la derecha. Van mucho más allá, imponiendo un cambio en la propia idea de la Administración, que deja de ser un sistema de dominación legal para convertirse en un sistema de gestión eficaz de los servicios públicos en el marco de la legalidad.

Toda esta transformación de nuestro sector público tiene que realizarse en sintonía con la construcción del Estado de las Autonomías que, como ya hemos insistido, constituye el reto más importante que la Constitución plantea.

La plena ciudadanía política supone, de forma esencial, el ensanchamiento de las libertades tanto individuales como colectivas, sin recortes ni mediatizaciones.

La consecución de la *Plena ciudadanía social* engloba todo aquello que hace referencia a la modernización de la sociedad española tan distante de las cotas de liber-

tad, igualdad y bienestar de las sociedades europeas. La sociedad española muestra una estructura de la desigualdad doblemente superior a las de nuestro entorno, en cuanto a distribución de la renta, oportunidades de promoción de los jóvenes o las mujeres, educación, sanidad o vivienda. Sin embargo, los recursos con que se afronta la desigualdad son la mitad de ambiciosos que los utilizados en Europa tanto en política fiscal como en política redistributiva del gasto público. La atención a los marginados es más que insuficiente en España, y bien merece recordar aquí que la estatura moral de una sociedad se pone de manifiesto en cómo tratar a sus miembros más débiles. Se requiere, pues, una política social radical, que conduzca a la ciudadanía plena en materia social suprimiendo progresivamente las desigualdades. Los servicios sociales, la salud, la seguridad social, la educación, la defensa del consumidor, etc., inciden directamente sobre el nivel de bienestar de los ciudadanos. Por otra parte, en una economía solidaria, el incremento en la oferta de servicios sociales no es sólo un mecanismo compensatorio —por vía de salario diferido— sino que tiene un claro contenido económico en cuanto a la generación de empleo y a los efectos multiplicadores sobre ciertos aspectos de la inversión.

La ciudadanía social deseamos que se articule a través de *la multiplicación del esfuerzo educativo y cultural*. La educación como derecho fundamental de todos los ciudadanos que lo poderes públicos deben garantizar mediante la programación general de la enseñanza y la creación de centros suficientes. La educación entendida como servicio público, en cuyo control y gestión tienen derecho a intervenir los interesados. La educación como instrumento de liberación, de progreso social y económico; como elemento de formación y adaptación profesional, contribuyendo a la lucha contra el desem-

pleo. Hay que evitar que se produzca, en función de los nuevos cambios tecnológicos, esa separación que se vislumbra entre «sabios e incultos» que, además de generar nuevos mecanismos de dominación, conlleva un enorme desperdicio de energías humanas.

España es un país culturalmente pobre, con participación popular escasa y colonialismo y dependencia cultural en beneficio de intereses económicos o de clase. Pese a la existencia de los graves problemas que atenazan nuestra vida colectiva —paro, terrorismo, etc.— los objetivos del desarrollo deben definirse también en términos de valoración cultural, de plenitud colectiva e individual, en definitiva, de calidad de vida, de forma que el hombre sea a la vez beneficiario y agente del desarrollo. Entendida así la cultura supone una permanente actitud de cambio y progreso para conectar con los valores y bienes humanos más esenciales —la libertad, la justicia, la solidaridad, el saber— y para hacerlos accesibles a todos en la mayor medida posible. La cultura debe ser entendida como bien público. Pertenece a todo el pueblo y nadie puede hacerla su propiedad exclusiva: ni ministerios, ni clases sociales, ni élites privilegiadas.

Los principios básicos del socialismo democrático —la igualdad, la seguridad ante la enfermedad, la vivienda, el empleo, la educación— se deben de completar con el objetivo de cambiar las condiciones culturales de la vida colectiva. La propia salida de la crisis será tanto más posible si paralelamente tiene lugar un enriquecimiento cultural de la sociedad. El desarrollo al que aspiran los países más avanzados apunta a la consecución de la plenitud individual y colectiva que no es otra cosa que la dimensión cultural de ese desarrollo.

**La política económica
debe tener como
hilo conductor
la generación
de empleo.**

La ciudadanía social se autentifica si se realiza un serio esfuerzo de *fortalecimiento de nuestra sociedad civil*. Que se res-

ponsabilice de organizar autónomamente sus energías e imaginación potenciando a las grandes instituciones sociales; de propiciar, en suma, la participación de los ciudadanos en lo que es de todos.

Hay que introducir en nuestro sistema económico los elementos que permitan avanzar hacia un mayor control social de nuestra economía.

Pero el desafío fundamental se encuentra hoy en *la esfera de la economía*. La crisis económica es nuestro principal motivo de preocupación. Difícilmente puede hablarse de ciudadanía en una sociedad con los niveles de desempleo que soporta la nuestra.

La dimensión que ha alcanzado el paro condiciona los restantes problemas que nuestra sociedad tiene planteados. Los costes sociales que provoca, la desintegración social, la marginación de importantes colectivos, son algunas de las manifestaciones de la amenaza que el paro ejerce sobre el futuro de la sociedad.

Si no se producen cambios en los hábitos sociales referentes a la actividad económica de la población se producirá en el cuatrienio un aumento neto de población activa de medio millón, que sumados a los más de dos millones de parados actuales deben dar idea de la magnitud del reto. La política económica, por tanto, debe tener como hilo conductor la generación de empleo, promoviendo un crecimiento sostenido y rápido. Pero no cabe apelar a políticas expansionistas de corto alcance: para que fructifiquen deben asentarse en bases firmes y enmarcarse en un plan general de crecimiento a largo plazo, que lleve a cabo, al mismo tiempo, la modernización necesaria de nuestra economía, su integración progresiva en la internacional y la apertura de nuevos horizontes de crecimiento.

Pero aún en la mejor de las hipótesis, será difícil dar ocupación a todos los activos, por lo que se hace imprescindible el reparto del trabajo disponible en una triple dirección. Adelantando la edad de ju-

bilación, sustituyendo los puestos liberados mediante «contratos de relevo» con jóvenes en busca de su primer empleo. Completando la escolarización plena hasta

los 16 años, en una primera etapa, y alargándola hasta los 18 en una segunda. Reduciendo progresivamente el tiempo de trabajo. Es la única manera de evitar la nueva tendencia a la segregación en las sociedades industriales entre activos y no activos. Hay que tender a trabajar menos tiempo para que puedan hacerlo más ciudadanos. Desgraciadamente, las soluciones a este problema escapan de los límites de un solo país. He aquí otra función importante de un gobierno socialista: Hacer valer su voz en los foros internacionales sobre estos temas que debería ser hoy pilar para la recuperación del internacionalismo de los trabajadores.

El segundo gran objetivo en materia económica debe ser la *modernización y puesta a punto de nuestro aparato productivo*. Para ello es imprescindible conceder un valor fundamental a la variable tecnológica. En un momento histórico en que las ventajas comparativas están cada día más relacionadas con la ciencia y la tecnología, es grave que una de nuestras principales carencias se localice en estos factores estratégicos.

Un gobierno socialista debe tener entre sus prioridades el apoyo a la *ciencia y a la tecnología*, pues no es posible mantener por más tiempo el frágil equilibrio entre desarrollo económico y estancamiento cultural, científico y técnico. El progreso científico y tecnológico es hoy imperativo del bienestar del futuro.

La consecución de la plena ciudadanía en materia económica supone el hacer realidad el principio constitucional por el cual «toda la riqueza del país, en sus distintas formas y fuera cual fuera su titularidad, está subordinada al interés general», introduciendo en nuestro sistema econó-

mico los elementos que permitan avanzar hacia un mayor control social de nuestra economía, cuya ausencia, para un socialista, impide la plenitud en la libertad y la igualdad.

Antes de terminar, unas consideraciones muy breves sobre política internacional ya que todo proyecto político debe intentar definir el papel de nuestro país en el contexto mundial. La recuperación de la libertad y de la soberanía popular rompió los nudos que impedían el desarrollo serio de un proyecto de política exterior para España. Los distintos gobiernos de la transición, no obstante, han desaprovechado esta oportunidad que se les brindaba para abrirnos al mundo exterior en defensa de nuestros intereses nacionales. Aquí, como en tantos otros aspectos de la política interior, el fatalismo y la falta de convicciones han reducido el marco de nuestra política exterior en la entrega más estúpida al atlantismo.

La política internacional de un gobierno socialista tiene que tener como espina dorsal la causa de la paz, haciendo de España un catalizador de concordia y distensión. Por ello, nuestro país no debe participar en la OTAN. Europa por un lado y Latinoamérica y los países árabes por otro, deben ser los polos de atracción de nuestra política exterior.

Vivimos en un mundo —y aquí hay que ser machaconamente reiterativos— en crisis. Los gérmenes de tensión y de violencia están sembrados por doquier. Hay que recuperar, por voluntarista que aparezca y a pesar de haber sido quebrada tantas veces, la vieja idea del socialismo democrático de la solidaridad internacional, avanzando hacia un nuevo internacionalismo. En este tema no cabe equivocarse, pues las miopías de hoy, los pequeños nacionalismos, pueden generar las tragedias de mañana.

Termino. Un gobierno socialista debe realizar las tareas que en esta coyuntura demanda la sociedad y que, sucintamente, hemos analizado, sin perder de vista el medio plazo y los objetivos históricos.

Nuestra preocupación no puede recaer sobre las vicisitudes de las siguientes elecciones sino sobre las generaciones de españoles. No debe nuestro empeño consistir tanto en la administración de lo viejo como en colaborar eficazmente a un feliz alumbramiento de lo nuevo.

La tarea ante nosotros es enorme, pero no más que la grandeza del objetivo. Empedrar el camino hacia el Socialismo.